

Enorme tumbé de fondos

DELITOS CONTRA LA NIÑEZ

Cómo la jefa de Avance Inc. se hizo de una fortuna apropiándose de fondos federales

1 Recibe asignaciones federales

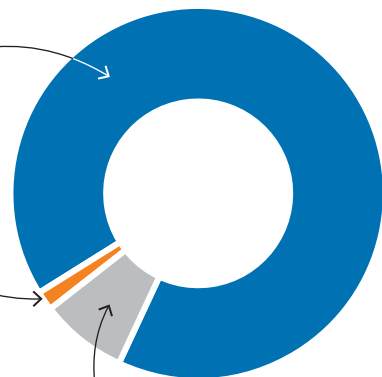
Elba Bonilla, como presidenta de Avance, Inc. (entidad que administraba más de 49 centros Head Start o Early Head Start), se apropió de asignaciones millonarias entre el 2010 y el 2012. La mayor parte del dinero era custodiado por el Departamento de la Familia (DF).

Total de asignaciones recibidas por Avance, Inc entre el 2010 y 2012:

\$30.8 millones

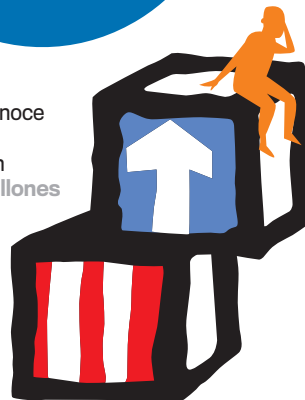
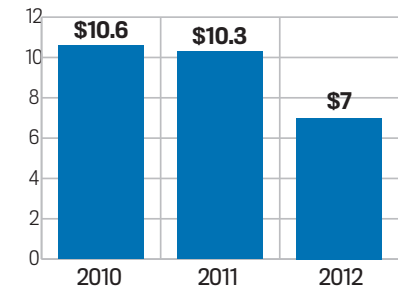
Unos **\$27.9 millones** fueron desembolsados a Avance durante ese periodo por el DF.

\$549,736
Programa de Alimentos y Cuido de Niños y Adultos de EE.UU.



Se desconoce de donde provienen **\$2.35 millones**

Desembolsos del DF por año en millones



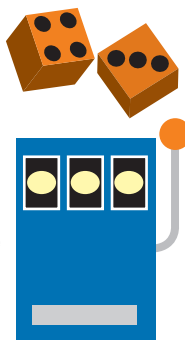
2 Reparte los chavos en distintas cuentas personales

Usando unas **35 cuentas bancarias**, Bonilla distribuyó parte de los fondos federales que le asignaron a Acuden.



3 El gasto del dinero

Elba Bonilla supuestamente gastó **\$836,000** jugando en el casino de un hotel en el Condado. No se precisó en qué gastó el resto de los \$1.4 millones que supuestamente se apropió.



- ✓ Arrestan a mujer que se apropió de \$1.4 millones de fondos de Head Start
- ✓ Mientras esto ocurría, los niños eran educados en condiciones precarias

Mariana Cobián y Ricardo Cortés Chico
puertoricohoy@elnuevodia.com

Las dudas en torno a qué pasó con los millones de dólares que desaparecieron del programa Head Start el pasado cuatrienio se disiparon ayer luego que las autoridades federales arrestaran por apropiación de fondos a Elba I. Bonilla Bayón, la presidenta de la corporación sin fines de lucro Avance de Puerto Rico, que tenía a su cargo la administración de 49 centros preescolares financiados con fondos federales.

Se trata tal vez de una de las apropiaciones más grandes de fondos educativos desde el escándalo del Departamento de Educación y su exsecretario Víctor Fajardo. Las imputaciones contra Bonilla Bayón implican que mientras los centros Head Start y Early Head Start de Loíza, Canóvanas y Río Grande confrontaban serios problemas de plagas, mantenimiento y hasta peligros físicos para los niños, la mujer se adueñó de alrededor de \$1.4 millones. Al menos la mitad (\$836,000) de ese dinero lo gastó jugando en un casino del área del Condado, donde Bonilla Bayón tenía hasta una línea de crédito como cliente habitual. No se precisó si la mujer tiene algún tipo de adicción a los juegos de azar.

Bonilla Bayón fue arrestada en la mañana de ayer luego que un gran jurado federal emitiera el miércoles un pliego acusatorio de 175 cargos por apropiarse de propiedad del gobierno federal, encubrimiento de activos de quiebra, fraude a programas de asistencia a estudiantes y de nutrición, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

El fiscal federal del caso, Wallace Bustelo, en una improvisada conferencia de prensa en el Tribunal Federal detalló que la apropiación de estos fondos ocurrió entre el 2010 y diciembre de 2012.

Como parte de sus funciones, la mujer manejó alrededor de \$30,800,178

en fondos federales que incluía los programas Child Care Development Fund Program, Child and Adult Care Food Program y del American Recovery and Reinvestment Act, además de las becas Pell.

“Todos nos levantamos temprano a trabajar, algunos hasta tarde. Mas, sin embargo, esta señora, con el dinero que se tumbó, tenía una casa en (la urbanización) Los Paseos, durmiendo con aire acondicionado y, cuando le daba la gana de levantarse, se iba al casino a gastar ese dinero. Y lo demás, sabrá Dios en qué se los gastó. Esto llora ante los ojos de Dios”, expresó molesto el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases.

SEÑALES DE ALERTA. Las primeras denuncias en torno a que algo andaba mal en las finanzas del programa Avance salieron de la Unión Internacional de Empleados Profesionales y de Oficina que representaba a alrededor de 300 trabajadores de Avance.

Ayer, en un comunicado de prensa Iram Ramírez, uno de los líderes sindicales, reiteró que llevaron la queja ante varias agencias del gobierno por lo menos desde el 2010.

Los cuestionamientos eran porque no había explicación para las constantes dilaciones en el pago de la nómina de los empleados de los centros.

La situación ya era un tanto insostenible para el 2012 y el descontento conllevó una serie de manifestaciones sindicales frente a las oficinas del Departamento de la Familia, agencia sombrilla de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden) que sirve como concesionaria de los fondos Head Start.

La situación financiera desembocó en una auditoría que llevó a cabo la firma Guzmán, Torres, Castro & Díaz, que reflejó enormes discrepancias fiscales. A finales del 2012 un grupo de trabajo de la Administración de Familias y Niños de EE.UU. visitó los centros preescolares afectados y detectó

FUENTE: Departamento de Justicia de EE.UU., Departamento de la Familia • GRÁFICA: EL NUEVO DÍA

Una historia avisada

En diciembre de 2012 una serie de cartas entre el gobierno federal y el Departamento de la Familia, sirvió de base para una serie de artículos en los que este diario denunció la mala supervisión que hizo el gobierno en los centros Head Start afectados y las consencias que el asunto tendría en el gobierno, en el manejo de fondos federales y en los 1,318 niños que resultaron afectados por lo que aparenta ser un caso claro de malversación de fondos públicos.



Carlos Cases, jefe del FBI en Puerto Rico.

ALEX.FIGUEROA@GFMEDIA.COM



ARCHIVO

Este Head Start de Luquillo fue cerrado en enero en medio de la crisis.

una serie de deficiencias que atentaban contra la salud y seguridad de los menores por lo que los centros fueron cerrados.

Una serie de cartas enviadas por la agencia federal a la entonces presidenta de la junta de Acuden, la ahora exsenadora Kimmey Raschke, daban cuenta de los problemas y colocaban al DF en la lista de concesionarios de "alto riesgo" ya que no fiscalizaron adecuadamente a Avance como proveedor de servicios federales.

La situación llevó al DF a cancelar el contrato con Avance mientras el gobierno federal puso en una especie de sindicatura a los centros que hoy día son administrados por una compañía extranjera que responde directamente al gobierno estadounidense.

En total eran 1,318 los niños afectados por las condiciones de los centros y unos 300 empleados.

MUCHO DINERO MUCHAS CUENTAS. Según la acusación, la acusada, de 67 años, emitió 105 cheques en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino por las cantidades entre \$1,000 y \$37 mil de aproximadamente 35 cuentas bancarias personales de distintos bancos. Tanto el casino como el DF colaboraron en la pesquisa.

El fiscal del caso detalló que la acusada inclusive recibió fondos por el reembolso de comidas y meriendas que se suponía fueran para los menores de los programas, y reportó quiebra, más escondió fondos al síndico de quiebra, como un cheque que recibió de \$99,307.03 del Child and Adult Care Food Program del Departamento de Agricultura federal. Parte de ese dinero, lo usó también en el casino.

Los cargos por robo de identidad agravado son relacionados a reportes mensuales que Bonilla Bayón suministraba al Departamento de la Fa-

milia estatal para recibir fondos usando la identidad de participantes del programa del Head Start, ya que tenía la información esencial de nombre, fecha de nacimiento, entre otros.

El delito por fraude al Student Financial Aid es relacionado a que la acusada no reembolsó \$13,185.50 al Departamento de Educación federal. Estos fondos fueron recibidos como dinero de la beca Pell para estudiantes del Centro de Capacitación y Asesoramiento Vetelba, Inc., que no completaron los cursos o no eran elegibles a dicha beca.

HASTA 10 AÑOS. De ser encontrada culpable, Bonilla Bayón podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por cada cargo, más dos años por el robo de identidad agravado consecutivos a la pena que se imponga, además de reponer el dinero y una multa de \$250 mil.

Bustelo aclaró que la investigación de este caso continúa.



LOS PROBLEMAS QUE TENÍAN LOS CENTROS

Además de los asuntos relacionados a las finanzas y el uso de fondos federales que llevaron ayer al arresto de la directora de Avance, funcionarios federales habían detectado una serie de problemas en los centros.

- Presencia de ratones
- Cucarachas en los salones
- Baños sucios o rotos
- Boquetes en áreas de juego
- Fregaderos dañados
- Falta de mantenimiento en baños
- Cables eléctricos expuestos
- Áreas de juego sin amortiguadores
- Áreas verdes sin podar

LA CIFRA

\$30

Millones

La cantidad total de fondos federales que recibió la empresa Avance para administrar los centros preescolares del programa Head Start y Early Head Start.

\$1.4

MILLONES

Cantidad de dinero que según las autoridades federales Elba I. Bonilla Bayón se apropió entre los años 2010 y 2012 mientras administraba con su compañía Avance unos 49 centros Head Start y Early Head Start.



LA IMPUTADA DE DELITO

Elba I. Bonilla Bayón

Era la directora ejecutiva y presidenta de la Junta de Directores de la corporación sin fines de lucro Avance, entidad que tenía a cargo la administración de casi medio centenar de centros preescolares financiados por el gobierno federal. También fue jefa del Centro de Capacitación y Asesoramiento Vetelba. Ayer, la mujer fue imputada de apropiarse de \$1.4 millones en fondos federales, fraude, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

Efectos vigentes

Acuden todavía lidia con los problemas que le causó la malversación de fondos por parte de Avance

Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com
Twitter: @rcorteschicoEND

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), todavía se recupera de los escollos burocráticos y monetarios que implicaron las irregularidades y la presunta apropiación de fondos cometida por la presidenta de la corporación sin fines de lucro Avance, una de las entidades delegadas que administraba sobre 40 centros Head Start en los pueblos de Loíza, Canóvanas y Río Grande.

Ayer, la administradora de Acuden, Olga Bernardy Aponte, señaló que aún manejan asuntos relacionados con la devolución o penalidad de \$2.4 millones por el caso ya que Acuden y su agencia sombrilla, el Departamento de la Familia, estaban llamados a fiscalizar, por el gobierno federal, el uso de estos fondos.

"La penalidad fue notificada a la pasada administración en diciembre de 2012. Son más de \$2 millones de penalidad. Todavía estamos buscando la manera de manejar este asunto", dijo Bernardy Aponte al reaccionar al arresto de la directora ejecutiva de Avance, Elba Bonilla Bayón.

Este asunto llevó a la Administración de Familias y Niños de EE.UU. (ACF, por sus siglas en inglés) a declarar en diciembre de 2012 al DF como un concesionario de "alto riesgo" para los fondos Head Start. La presunta malversación de fondos ocurrió entre el 2010 y el 2012. Durante la mitad de ese periodo Acuden fue dirigida

por la licenciada Ileana Inserni.

Bernardy Aponte señaló que desde que comenzó en el cargo, en enero de 2013, comenzó a ejecutar un plan para mejorar la fiscalización de los fondos Head Start. Añadió que al cabo de unos meses se quitó a la agencia entre la lista de concesionarios de alto riesgo. Ese plan les permitió intervenir con tres proveedores de servicios que tampoco cumplían con algunas de las disposiciones de calidad que exige el programa estadounidense.

Esto permitió que se mantuvieran los fondos que permiten las operaciones de los restantes 589 centros, distribuidos en 60 de los municipios de la Isla. "Hemos estado cumpliendo en el último año y ya salimos del alto riesgo", apuntó la funcionaria.

Avance operaba unos 49 centros asociados a los programas Head Start o Early Head Start. Ocho de estos centros eran operados por Avance en coordinación directa con las agencias federales. El resto era a través de acuerdos con el Departamento de la Familia, que sirve de custodio de gran parte de los fondos destinados a Puerto Rico.

Muchos de estos centros fueron cerrados temporariamente en lo que se remodelaban. Además de las irregularidades, las agencias federales denunciaron el mal estado de muchas de las instalaciones, que llegaban al punto de atentar contra la salud y la seguridad de los niños.

La ACF contrató directamente a una compañía estadounidense para administrar estos 41 centros en lo que se resuelve la controversia.



"Lo más triste de esto es que se atentó en contra de los niños del País, sobre todo los de escasos recursos económicos"

OLGA BERNARDY APONTE
Jefa de Acuden